

ESTRATEGIAS CAMPESINAS FRENTE AL AJUSTE Y LA GLOBALIZACIÓN EN MÉXICO

FERNANDO RELLO*

EL CONTEXTO: GLOBALIZACIÓN, AJUSTE ESTRUCTURAL Y CRISIS RURAL

Los gobiernos de México comenzaron a aplicar programas de ajuste estructural desde 1983 y, con ello, han modificado severamente las condiciones en las que trabajan los campesinos. Como ha sucedido en otros países, estos programas de ajuste han traído consigo una disminución de la intervención del Estado y de la inversión y los subsidios gubernamentales en la economía rural. La disolución o el empequeñecimiento de muchas empresas públicas, dieron como resultado la disminución drástica de servicios básicos rurales como el financiamiento, el seguro, la asistencia técnica y la investigación, que antes proveía el Estado. La privatización de la economía rural no ha creado nuevos actores que sustituyan eficazmente al Estado en las funciones que éste desempeñaba antes. Se han creado vacíos institucionales y fallas de mercado que afectan particularmente a los pequeños productores rurales.

Con la entrada al GATT y, sobre todo, con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN), México se ha embarcado en un

Manuscrito recibido en octubre de 1999; versión final, abril de 2000.

Agradezco sinceramente a los dictaminadores anónimos las observaciones realizadas.

* Profesor e investigador adscrito a la Facultad de Economía de la UNAM, e-mail: rello@servidor.unam.mx

proceso de apertura comercial con el exterior mucho más acelerado de lo que los tratados firmados le exigían (liberalización unilateral). La entrada de granos básicos importados a bajos precios han exacerbado la competencia en los mercados domésticos y están colocando a los pequeños productores en una situación difícil.

Las reformas y las políticas gubernamentales, en lugar de disminuir la pobreza rural, la han incrementado. El número de habitantes rurales pobres aumentó de 6.7 a 8.8 millones entre 1984 y 1992. La pobreza en el sector de los ejidatarios –los beneficiarios de la reforma agraria– es masiva pues 47% de ellos era pobre en 1994 y profunda, ya que 34% se encontraba en situación de pobreza extrema en ese mismo año (de Janvry, *et al.*, 1997).

ESTRATEGIAS DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS

Las respuestas de las familias campesinas son heterogéneas, tal y como lo son también los diversos tipos de ellas. La unidad de análisis de este artículo no es el campesino visto como productor, sino la familia campesina, poseedora de diferentes tipos de recursos y activos, los que son empleados en diferentes terrenos buscando la satisfacción de las necesidades de esta unidad social básica. Estos terrenos abarcan la producción agropecuaria, la participación en los mercados laborales y de tierras, la utilización de sus organizaciones sociales y el establecimiento de convenios y alianzas con otros grupos sociales. Nos referiremos a estas respuestas, a continuación, basándonos en encuestas de hogares ejidales.

REFORZAMIENTO DE LA LÓGICA TRADICIONAL DE LA ECONOMÍA CAMPESINA: SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR Y PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO

Ante el clima de inseguridad provocado por el ajuste estructural, la globalización y el comportamiento errático de los mercados y la política gubernamental, los campesinos han optado por una estrategia que minimiza los riesgos, lo que en el terreno de la producción se expresa en un aumento de la importancia de los cultivos y prácticas agrícolas tradicio-

nales, orientados a cubrir en la mayor medida posible la seguridad alimentaria del grupo, lo cual no excluye el cultivo de bienes para el mercado. Los siguientes hechos sustentan esta afirmación.

- i) La autosuficiencia alimentaria de la familia es un objetivo primordial para cuyo logro ésta no escatima medios. En regiones de economía campesina tradicional, la producción de alimentos para el consumo directo es esencial. Aquí el autoconsumo de maíz y frijol es una práctica extendida: 90% de los productores entrevistados en la encuesta ejidal de 1994 declararon que usan maíz para consumo humano y tres cuartas partes dijo utilizarlo en la alimentación de animales y como semilla. En promedio cada familia reserva 1.4 toneladas para su consumo anual y 1.2 toneladas como forraje. Existen diversas estimaciones de la magnitud total del autoconsumo, la cual varía mucho según el tipo de productor, pero en términos generales se calcula que oscila entre 35 y 40% de la producción nacional.¹
- ii) Reforzamiento de los cultivos tradicionales de la economía campesina, como el maíz y el frijol y crecimiento lento de la diversificación de cultivos (comerciales y exportables). En el lapso 1990-1994, los precios de garantía fijados por el gobierno elevaron la rentabilidad relativa del maíz frente a otros cultivos, lo cual dio lugar a una expansión de la superficie sembrada y la producción, no sólo en regiones maiceras de secano, sino en zonas de tierra irrigada. En el periodo 1995-1998 los precios relativos del maíz cayeron pero la superficie sembrada se mantuvo, sobre todo en zonas de agricultura campesina. Esto podría indicar la decisión de los pequeños productores de seguir sembrando un cultivo seguro, cuya tecnología es conocida, en un contexto de incertidumbre ocasionado por la volatilidad de los mercados sujetos a la globalización.
- iii) Aumento de la intercalación de cultivos. Si bien 75% de las fincas sembraron maíz sólo, la alternancia de cultivos ha venido aumentando desde 1990, combinando el maíz con el frijol y otros bienes de consumo básico, lo cual refleja una preocupación de los productores de alcanzar una suficiencia alimentaria familiar como forma de reducir el riesgo.

¹ La encuesta de 1990 fue elaborada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la de 1994 por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la CEPAL, y la de 1997 por el Instituto de Desarrollo Agrario (INDA) y el Banco Mundial. Análisis comparativos de dichas encuestas se encuentran en A. de Janvry, G. Gordillo y E. Sadoulet, *op. cit.* y B. Davis, "Adjustment in the Ejido Sector", Informe de Consultoría, *Banco Mundial*, Environmentally and Socially Sustainable Development. Sector Management Unit, Washington, 1999.

- iv) Menor inversión en la parcela frente al alza de precios de insumos y menor disponibilidad de crédito, tendencia que se expresa en una disminución del uso de insumos y en la aplicación de tecnologías de menor costo. Durante el periodo 1990-1994 el porcentaje de productores que utilizaron fertilizantes disminuyó de 61 a 52%, aquellos que utilizaron agroquímicos cayó de 53 a 44% y el porcentaje de los que usan semillas mejoradas descendió 24%, pero la caída más dramática ocurrió en la utilización de los servicios de asistencia técnica: el número de productores que dispuso de este servicio pasó de 60 a 9%. La virtual desaparición de los servicios de asistencia técnica ofrecidos por instituciones públicas, no fue sustituida rápidamente durante este lapso por empresas privadas y dejó a los productores en un alarmante vacío. Obviamente, todo esto representó una peligrosa regresión tecnológica precisamente en el momento en que la globalización y la creciente competencia por los mercados domésticos exige una mayor competitividad.
- v) Se ha hecho más importante el papel de la actividad ganadera como complemento de la dieta familiar (carne, leche y huevos producidos en tierras comunes o el traspasío) y como forma de ahorro accesible a las familias rurales, además de que representa una fuente de ingreso importante (11% del total). Si se comparan las encuestas de hogares rurales de 1990, 1994 y 1997, resulta que el número de ejidatarios que tienen ganado fue subiendo: 41, 44 y 48% respectivamente, así como también se incrementó el número promedio de cabezas por ejidatario (4.4, 5.7 y 6.7 en esos mismos años).

Sin embargo, estos avances se dieron solamente en la franja de ejidatarios con mayor acceso a la tierra, lo cual vino a reforzar las desigualdades ya existentes dentro del sector ejidal. Por ejemplo, el número de cabezas por ejidatario en el subsector de los minifundistas (con menos de dos hectáreas) que había aumentado de 1.3 a 1.7 en el periodo 1990-1994, cayó a 1.2 en 1997, muy probablemente como resultado de la severa crisis iniciada en 1995. Esto indica un empobrecimiento neto de los productores más pobres, una merma de sus ahorros. En cambio, en la franja de ejidatarios que tienen entre 2 y 18 hectáreas, el número de cabezas per cápita aumentó. Agrupando a los ejidatarios que acumularon ganado, se tiene que existe una relación entre dicha acumulación con la cantidad de ingresos derivados de la migración, hecho que sugiere que la migración ha servido para financiar la actividad ganadera y con ello el ahorro campesino (B. Davis, 1998).

- vi) Finalmente, otra respuesta de los productores ha sido aprovechar al máximo los programas oficiales de apoyo al campo. El principal entre éstos es el programa de apoyos directos PROCAMPO, cuyas transferencias representaron en 1997 nada menos que 7.4% de los ingresos de los ejidatarios encuestados.

En suma, la respuesta campesina en el terreno de la producción consiste en la tendencia general y dominante al acentuamiento de una estrategia campesina de reproducción social, en la cual la seguridad alimentaria familiar y la disminución del riesgo desempeñan un papel fundamental.

INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN MERCADOS LABORALES

Para compensar sus insuficientes activos territoriales y los efectos negativos de la crisis económica y de políticas macroeconómicas desfavorables, las familias rurales han acudido cada vez con mayor fuerza a las actividades extragrícolas para elevar sus ingresos y nivel de vida. Esto significa que el ajuste del sector campesino frente a la crisis, se da principalmente fuera de la agricultura, en los mercados laborales y en otras actividades extragrícolas. Así, el porcentaje de hogares que participó en actividades extragrícolas se incrementó 33% en el periodo 1994-1997, llegando al 60% de las familias.

El ingreso agrícola de las familias ejidales ha disminuido en importancia. Para los minifundistas (familias con menos de dos hectáreas de tierra cultivable) el ingreso agrícola representaba sólo 10% del total y el resto provenía de actividades fuera de la agricultura, del trabajo asalariado principalmente. El ingreso de los productores que tienen más tierra cultivable, es más cuantioso pero aún en este caso los ingresos extragrícolas alcanzan entre 40 y 50 por ciento.

La migración es una variable importante de las estrategias de vida de los campesinos mexicanos. No sólo es una fuente de ingreso que complementa otros ingresos familiares, sino que las remesas sirven para invertir en activos como tierra, ganado o en el mejoramiento técnico de las parcelas. Asimismo, las remesas son una forma de diversificar las fuentes de ingreso y estar menos expuesto al riesgo de reducciones del ingreso familiar ocasionadas por factores de inestabilidad imprevistos, tanto climáticos como económicos. Las encuestas indican que 45% de

las familias de ejidatarios tienen un miembro que ha emigrado o bien cuentan con hijos o familiares que se encuentran trabajando en Estados Unidos. La emigración a este país ha aumentado recientemente como consecuencia de la agudización de la crisis rural y el mayor valor del dólar con respecto al peso. La encuesta de 1994 indicaba que 3% de las familias encuestadas tenían en ese momento un miembro trabajando en los Estados Unidos, porcentaje que subió a 8% en 1997.

Las remesas de la emigración son gastadas en consumo familiar, mejoramiento de la vivienda, así como en la adquisición de tierra, ganado, maquinaria o insumos. Ello representa un aumento de la capacidad de generar ingresos futuros: la encuesta de 1997 muestra que los ingresos de las familias que combinan la agricultura con la emigración son superiores a las de aquellas que no tienen acceso a la emigración.

Son varios los factores que explican el mayor o menor acceso a la migración. Tal vez el más importante son las redes de solidaridad social e información (capital de migración) que abren las puertas de una empresa llena de riesgos, con fuertes barreras a la entrada, y que reducen los costos de transacción de la emigración. Los datos de las encuestas señalan que los hogares con migrantes tienen más recursos (tierra, ganado, capital humano, medido por la escolaridad, y experiencia externa) que los hogares sin migrantes, lo que indica que no son los más pobres los que emigran, sino las familias que pueden sufragar los costos de la emigración y tienen las relaciones para hacerlo.

La emigración tiene consecuencias para la distribución del trabajo entre mujeres y hombres. Del total de adultos migrantes 9% eran mujeres en 1994 y 11% en 1997, lo cual indica que las mujeres migran mucho menos que los hombres (y cuando lo hacen prefieren la migración dentro del país). Esto obliga a las mujeres a quedarse al frente de la explotación familiar y a asumir funciones que antes le correspondían a los hombres, un fenómeno llamado la "feminización de la agricultura". Ello implica que las mujeres tienen nuevas responsabilidades y están participando —y lo harán cada vez más— en tareas productivas, mercados de insumos y productos, organizaciones sociales locales y se relacionan crecientemente con instituciones públicas. Lo anterior tiene implicaciones significativas para la definición de políticas y programas de desarrollo rural.

Las estrategias de sobrevivencia de los productores rurales son, al menos en parte, una respuesta a la inseguridad que provoca la inexistencia de instituciones y mercados o el mal funcionamiento de éstos. Tomemos como ejemplo el financiamiento y el aseguramiento rurales, servicios básicos en la producción rural. Con la aplicación del programa de ajuste estructural, el financiamiento del BANRURAL, el banco oficial de fomento agrícola, disminuyó sustancialmente y su función crediticia en zonas rurales pobres fue muy parcialmente sustituida por programas de crédito a la palabra. El resultado ha sido la disminución de la cobertura crediticia: mientras que 30% de los ejidatarios tenía acceso a crédito formal o informal en 1994, este porcentaje cayó a 20% en 1997. El panorama del seguro agrícola es aún peor, de tal forma que la gran mayoría de los pequeños y medianos productores rurales trabajan sin aseguramiento agropecuario.

En estas circunstancias, la búsqueda de ingresos extragrícolas, en los mercados laborales domésticos o a través de la migración, puede interpretarse, al menos en parte, como un intento de superar la falta de instituciones financieras adecuadas y un bajo acceso al crédito. La estrategia de combinar la emigración, con la compra de ganado y la agricultura, es un ejemplo. Las remesas sustituyen el crédito formal como fuente para financiar la inversión en animales, los que brindan una seguridad y constituyen una forma de ahorro accesible a las familias rurales. Asimismo, la permanencia del autoconsumo, el resurgimiento de los cultivos intercalados y el fortalecimiento del cultivo del maíz, con prácticas de bajo costo, es una forma de minimizar el riesgo, en un contexto de ausencia casi total de un mercado de seguros y de inestabilidad en los mercados.

MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TIERRAS

Los tratos de tierra –rentar a otros o tomar en renta, vender y comprar o entrar en convenios de aparcería o de otro tipo– son parte de las estrategias de las familias rurales. Los cambios a la legislación agraria de 1992 buscaron fomentar las transacciones de tierras al legalizarlas y fundar

nuevas reglas orientadas a agilizarlas.² Los campesinos y productores agropecuarios han respondido a esta nueva normatividad, la cual les ofrece nuevas posibilidades, participando más activamente en los mercados de tierra. Así, los productores han buscado incrementar la cantidad de tierra a su disposición, como una manera de hacer frente a su difícil situación. La cantidad de tierra que en promedio tuvieron los ejidatarios encuestados aumentó de 8 hectáreas en 1994 a 10 hectáreas en 1997, un incremento del 25%. La venta pero sobre todo la renta de tierra, es el mecanismo más usado para las transferencias de tierra.

Cabe señalar que la renta de tierras ejidales era ya una práctica extendida a pesar de que estaba prohibida por la ley pero, como efecto de la reforma jurídica agraria, se observa en las encuestas de hogares de 1990, 1994 y 1997 un dinamización del mercado de tierras. El número de ejidatarios que utilizaron tierras que no son suyas (o sea que consiguieron mediante algún tipo de transacción) fue aumentando: 4.7% en 1990, 8.5% en 1994 y 9.9% en 1997. El mercado de tierras es todavía pequeño pero no deja de ser significativo que un 10% de los ejidatarios tenga acceso a la tierra a través de tratos agrarios. Asimismo, el número de ejidatarios que rentó tierras a otros agentes también fue aumentando: 1.4%, 6.4% y 7.8% en los mismos años.

El dinamismo del mercado de tierras se observa en todos los tipos de productores, aunque el significado de las transacciones no es el mismo para éstos. Los minifundistas (productores con menos de dos hectáreas) acudieron al mercado de tierras para rentar más que para tener acceso a tierra. Durante el lapso 1990-1997 el porcentaje de los productores minifundistas que se hicieron de predios disminuyó; en cambio, el porcentaje de los que rentaron tierras a otros aumentó constante y rápidamente: 0.2%, 9.9% y 22.2% respectivamente en 1990, 1994 y 1997. En este caso la decisión de las familias es dar a renta y buscar ingresos extragrícolas.

² Este importante volumen de producción el cual nunca llega al circuito de comercialización, ha llevado a plantear el argumento de que la producción campesina no se verá afectada por la apertura comercial, ya que los productores, así como la superficie dedicada a este importante grano básico, no operan con la lógica competitiva del mercado. Estimaciones sobre el autoconsumo se encuentran en E. Caballero y F. Zermeno. *Condiciones competitivas de la agricultura del maíz en México*, Nuevo Horizonte, México, 1993 y A. de Janvry, G. Gordillo y E. Sadoulet, *op. cit.*, p. 124.

Esta información parecería darles la razón a quienes temen que la legalización de los tratos de tierras, en un contexto de crisis rural y de disminución del crédito, pudiera dar lugar a una proletarización de los campesinos y a una reconcentración de la tierra. Otro dato apunta en esta misma dirección: entre 1990 y 1994 se observa una disminución del número de minifundistas y un aumento de los predios entre 2 y 5 hectáreas, lo cual sugiere que existe un proceso de consolidación de la pequeña propiedad a expensas del minifundio (de Janvry *et al.*, 1997). En otras palabras, ocurriría una proletarización y un fortalecimiento de las economías campesinas al mismo tiempo.

Sin embargo, algunos hechos sugerirían que las familias minifundistas no están dispuestas a ceder sus tierras de manera permanente y a perderlas todas. Una investigación reciente indica que por lo regular los periodos de arrendamiento no son mayores de un año y que los ejidatarios no rentan toda su tierra, sino que conservan una parte, presumiblemente para dedicarla a actividades de subsistencia. Además, el tipo de tratos agrarios más frecuentes entre los más pobres no es la renta sino la aparcería y la mediería, transacciones muy frecuentes en regiones de alta marginalidad y que no involucran peligro de perder la tierra (CEPAL, 1999). Toda esta información sugeriría que los campesinos entran al mercado del arrendamiento obligados por la necesidad económica, agravada en tiempos de crisis, pero que no se proponen abandonar la agricultura y que la combinación de rentar y trabajar fuera de la parcela podría ser una forma de enfrentar tiempos difíciles. Podría tratarse entonces de una proletarización temporal.³

Las pequeñas propiedades (entre 2 y 5 hectáreas) han aumentado en número y en superficie promedio gracias al mercado de tierras. Sus propietarios han acudido a él para aumentar su acceso a tierra de manera creciente: su porcentaje de participación pasó de 3.5% en 1990 a 10.4% en 1997. Los grandes propietarios también han participado activamente en este mercado como compradores y vendedores. En ambos casos la

³ En 1992 fue modificada la Constitución para legalizar la renta y la venta de tierras ejidales que antes eran consideradas transacciones ilegales, aunque se solían hacer frecuentemente.

estrategia consiste en controlar más tierra y en invertir en tecnología para valorizarla y sacarle mayor provecho utilitario.

MAYOR PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES

Establecer relaciones de solidaridad y ayuda mutua, formar organizaciones sociales y asociaciones de diversos tipos para, a través de ellas, actuar colectivamente, forma parte esencial de la estrategia de los campesinos. Este es el sentido de lo que recientemente ha sido llamado capital social, es decir, el conjunto de instituciones, organizaciones y redes a través de las cuales comunidades y grupos discuten, toman decisiones y actúan colectivamente en torno de asuntos económicos y sociales de interés común.

México es un país rico en tradiciones comunitarias y organizaciones campesinas. Con el cambio de modelo económico y la entrada a la economía global, éstas están sufriendo transformaciones cuyo final sería aventurado predecir, pero el rasgo común de este proceso es la firme decisión de los campesinos de seguir utilizando sus mecanismos de acción colectiva, readecuándolos a las nuevas circunstancias.⁴

El ejido y la comunidad siguen siendo los principales mecanismos de acción colectiva en el campo mexicano. Están sufriendo cambios y un cierto debilitamiento, en particular en regiones muy expuestas a la lógica del mercado, como consecuencia de la crisis económica y la baja rentabilidad de la agricultura, que obliga a los campesinos a emigrar y rentar o vender sus parcelas. Sin embargo, la reciente encuesta ejidal, levantada en 1997, ofrece información que muestra un ejido y una comunidad vivos y actuantes, en los cuales la participación de sus miembros es frecuente. Por ejemplo: *i*) las asambleas ejidales y comunales se realizan

⁴ Entrevistas revelaron que los motivos más frecuentes mencionados por quienes dan tierra en arriendo son: necesidades familiares, falta de recursos para el cultivo, deudas y edad avanzada. CEPAL, 1999. En este breve espacio no es posible analizar con detenimiento el tema de las organizaciones campesinas en México. El lector interesado podría consultar el estudio de la CEPAL. Instituciones y organizaciones de productores rurales. Experiencias de interés para Centroamérica. LC/MEX/R. 625, México, septiembre de 1997. Un análisis de los vínculos entre campesinos y agroindustria en América Latina ha sido publicado por la CEPAL, FAO y GTZ, 1998.

frecuentemente para discutir asuntos comunes y tomar decisiones (91% de los núcleos realiza asambleas cuando menos trimestralmente); *ii*) la participación es regular y nutrida (80% de los entrevistados dijo asistir a ellas siempre y 18% casi siempre); *iii*) las decisiones se acatan (tres cuartas partes de los ejidatarios opinan que los acuerdos se respetan siempre y 21% dijo que casi siempre) y *iv*) existen representantes ejidales democráticamente electos y actuantes en sus puestos, según 98% de los entrevistados. Esto indica que el ejido sigue siendo un lugar básico de toma de decisiones, un espacio para enfrentar problemas comunes de manera colectiva.

También son muy importantes las organizaciones informales y las redes de cooperación locales, como todas las formas de ayuda mutua y solidaridad —que reciben diferentes nombres: tequio, faena, guelaguetza, etcétera— así como las sociedades y los grupos encargados de tareas específicas, como la reparación de calles o caminos, el agua potable, el cuidado de las escuelas, entre muchas otras. Las funciones que desempeñan tanto éstas como los ejidos, son varias pero destacan la construcción y provisión de bienes públicos que son fundamentales para la vida social. Dada la insuficiente penetración de las políticas sociales oficiales, sobre todo en zonas pobres y marginadas, el papel de la organización social es primordial para elevar el nivel de bienestar de las comunidades. En su ausencia, éste sería mucho menor.

Otra función consiste en servir como capital de migración, es decir como redes sociales de apoyo, de transferencia de contactos e información, que facilitan la emigración y reducen sus costos. El éxito de la empresa migratoria depende en buena medida de este capital. Dichas redes y organizaciones sociales se reproducen en los lugares de llegada, como por ejemplo las asociaciones de migrantes mixtecos, otomíes, etc., en la Ciudad de México o en el extranjero.

Se observa una tendencia en el ejido a perder su importancia como organización económica, es decir, como aglutinadora de las iniciativas productivas colectivas. Esto puede deberse a la gran heterogeneidad interna del ejido, en el cual conviven productores, trabajadores y avecindados. Un conjunto social tan diverso y tan grande no resulta práctico como forma de organización económica, sobre todo en un contexto de

tanta competencia como el actual. En cambio, han surgido con esta finalidad un gran número de organizaciones intraejidales, que son grupos más pequeños y homogéneos, los que reúnen a personas interesadas en proyectos o tareas específicas. Son las organizaciones más dinámicas en la actualidad y en el pasado reciente (asociaciones de productores por cultivo, cooperativas, cajas de ahorro, uniones de crédito, grupos de mujeres, entre otras), las que están conduciendo las iniciativas productivas de los pequeños productores.

En cambio, las organizaciones económicas más grandes atraviesan por un periodo difícil. Éstas surgieron durante las décadas de los setenta y ochenta y lograron avanzar bastante en el control de las diversas fases del proceso productivo (compras de insumos, producción, comercialización y creación de agroindustrias). Sin embargo, eran muy dependientes de las rentas y los apoyos gubernamentales y se basaron en prácticas y proyectos frágiles y riesgosos, como el monocultivo y grandes y costosas agroempresas, financiadas con créditos. Estas organizaciones de productores comenzaron a resquebrajarse cuando sobrevino la crisis económica y de rentabilidad agropecuaria, al retirarse el Estado de muchas de sus funciones de apoyo y transferencia y al encarecerse el crédito. Muchas de ellas están ahora en un complicado proceso de reestructuración, debido a los desincentivos provocados por las políticas macroeconómicas y la falta de políticas agrícolas adecuadas.

Pese a todo, otro tipo de organizaciones de corte regional han salido mejor libradas de la crisis y el ajuste. Se trata de organizaciones con actividades más diversificadas y menos dependientes del crédito y las transferencias gubernamentales, que combinan el autoconsumo con proyectos productivos pequeños en varios campos (la agricultura, ganadería, las artesanías, el abasto de alimentos, entre otras). Estas organizaciones no cayeron en el riesgo del monocultivo y las grandes inversiones financiadas con crédito y siguieron una estrategia de diversificación y bajo riesgo, que a la postre las resguardó mejor de los efectos de la crisis.

En suma, los pequeños productores creen en sus organizaciones y seguirán usándolas y adecuándolas a las condiciones externas cambiantes. No es exagerado decir que su futuro depende de ellas porque representan la mejor manera de contrarrestar las desventajas que sus reducidos acti-

vos y escalas de producción les representa, sobre todo en forma de elevados costos de transacción. Las políticas públicas deberían orientarse a fortalecer este capital social rural.

Otra estrategia de los campesinos es asociarse con agentes productivos y empresas privadas, con el propósito de conseguir lo que mercados incompletos o inexistentes e instituciones deficientes, no pueden ofrecerles en la medida de sus necesidades: asistencia técnica, financiamiento, mercados, tecnología, seguridad y mayores oportunidades de ingreso. Es cierto que los campesinos no llevan la iniciativa, la que corresponde a las empresas o asociaciones privadas, pero responden positivamente a las oportunidades que éstas les abren en su búsqueda de ganancias. Existen en México numerosos convenios entre agroindustrias y pequeños productores. Algunos ejemplos son: *i)* contratos con agroindustrias procesadoras de frutas y hortalizas que involucran diferentes arreglos de asistencia técnica, distribución de insumos, crédito y compra de materia prima; *ii)* contratos de aparcería con grandes empresas avícolas, de acuerdo a los cuales éstas suministran pollitos de un día, medicamentos, alimento balanceado y asistencia técnica, a cambio de que los productores les entreguen pollos engordados y *iii)* contratos de compra de granos a precios prefijados con grandes empresas harineras.

Finalmente, cabe mencionar la participación de los campesinos en empresas y asociaciones privadas llamadas integradoras porque sirven como intermediarias entre los productores rurales y las fuentes de financiamiento —públicas y privadas—, las empresas compradoras y las agroindustrias, desempeñando una función de enlace o integración. Esto representa ventajas para los campesinos porque es una forma de acceder a créditos, asistencia técnica, insumos baratos y de reducir el riesgo de mercados de productos finales inestables, a pesar de que, dada las relaciones asimétricas de estos convenios, los precios pagados a los productores son apenas superiores a los prevalecientes en los mercados locales.

CONCLUSIONES

La crisis rural y la aplicación de programas de ajuste estructural han afectado profundamente las condiciones económicas en las que los campesinos trabajan. Las respuestas de las familias campesinas han consistido en aprovechar y valorizar los diferentes activos y recursos a su disposición en diferentes terrenos y mercados. En el ámbito de la producción, su estrategia ha sido buscar la autosuficiencia alimentaria local y reducir riesgos. Sin embargo, su respuesta más importante se ha dado fuera de la agricultura, participando de manera creciente en los diferentes mercados laborales en los cuales obtienen ingresos extragrícolas que, en el caso de los productores con poca tierra, representan la fuente de ingreso más importante.

La emigración se ha transformado en una actividad muy importante. De ella, las familias campesinas obtienen ingresos sustanciosos que se invierten en las comunidades para mejorar las viviendas, los bienes colectivos y también para mejorar las tecnologías productivas. Las redes sociales han desempeñado un papel fundamental para apoyar y expandir las actividades migratorias (capital de migración). El mercado de tierras ha facilitado la emigración ya que los campesinos migrantes pueden alquilar sus tierras o entrar en diversos convenios de aparcería con otros campesinos, valorizando sus propiedades mientras están ausentes.

Estas tendencias observadas tienen importantes implicaciones para la definición de políticas de desarrollo rural, las que no deberían circunscribirse a fomentar la producción y la comercialización agropecuaria. El desarrollo regional y la creación de empleos no agrícolas es una tarea fundamental de la política de desarrollo rural, lo cual coloca a ésta en terrenos que generalmente no suele abarcar. En otras palabras, la política sectorial agropecuaria es sólo una parte de una estrategia de desarrollo rural. Además, es necesario plantear la importancia de los encadenamientos productivos intersectoriales en los planos local y regional (la agroindustria, por ejemplo, en particular aquella intensiva en mano de obra), el fomento de actividades no agrícolas generadoras de empleos, las instituciones que facilitan los vínculos entre agentes productivos y las

relaciones entre el campo y las ciudades de provincia, las que tanto impacto tienen sobre sus zonas agrícolas de influencia.

Para las familias rurales más pobres, las estrategias de fomento agropecuario son claramente insuficientes, debido a lo magro de sus recursos naturales. La mejor forma de combatir la pobreza rural, aunque no la única, es crear empleos en las regiones y fortalecer la capacidad de los grupos rurales pobres de acceder a empleos mejor remunerados. Esto exige mejores programas de educación y capacitación de jóvenes rurales, programas de alimentación y salud de niños y jóvenes, mejoramiento de caminos y vías de comunicación para abatir costos de transporte y transacción y aumentar el acceso de grupos geográficamente marginados a empleos e información y el reforzamiento del capital social de los grupos rurales.

BIBLIOGRAFÍA

- Caballero, Emilio y Felipe Zermeño, *Condiciones competitivas de la agricultura del maíz en México*. Nuevo Horizonte Editores, México, 1993.
- CEPAL, *Instituciones y organizaciones de productores rurales. Experiencias de interés para Centroamérica*. LC/MEX/R. 625, México, 1997.
- CEPAL, FAO, GTZ, "Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y oportunidades comerciales", Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1998.
- CEPAL, *El mercado de tierras en México*, México, 1999.
- Davis, Benjamin, "Adjustment in the Ejido Sector", *Informe de Consultoría*. Banco Mundial, Environmentally and Socially Sustainable Development. Sector Management Unit, Washington, 1999.
- De Janvry, Alain, Gustavo Gordillo, y Elizabeth Sadoulet, , *Mexico's Second Agrarian Reform. Household and Community Responses*. Center for US-Mexican Studies, Universidad de California, La Jolla, 1997.